

Discurso de entrega de propuestas de la sociedad civil para una política pública en seguridad ciudadana



Bianka Rodríguez brinda discurso durante entrega de propuesta como representante de la plataforma.

Buenos días a todas y todos, queremos agradecer la participación de las distintas organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que han contribuido a la generación de espacios de diálogo y análisis sobre problemáticas esenciales para nuestra realidad nacional y regional. Además, agradezco la participación de instancias gubernamentales y de organismos internacionales de derechos humanos.

Los Diálogos para la seguridad ciudadana ha sido un espacio que 22 organizaciones de sociedad civil, con amplia experiencia en prevención de la violencia, atención a víctimas, persecución del delito y trabajo en rehabilitación e inserción, han preparado como un aporte a una de las problemáticas más sentidas por la población salvadoreña: la violencia, la fuerte criminalidad que nuestro país no ha podido superar desde la firma de los acuerdos de paz hace ya 27 años.

Desde ese entonces, muchas de las organizaciones aquí presentes han mantenido un esfuerzo constante por atender un fenómeno con raíces estructurales, donde la voluntad política ha sido la principal ausente, y donde, justamente, estas organizaciones han tenido que asumir las obligaciones de un Estado interesado más en el poder partidario, que en atender las necesidades de población.

Nuestros esfuerzos han permitido presentar, en repetidas ocasiones y a distintos gobiernos, diversas propuestas para el abordaje de los problemas asociados a la violencia. Hemos denunciado los efectos negativos de la militarización, hemos señalado las graves violaciones a derechos humanos, se ha llamado la atención sobre la situación deplorable de las personas privadas de libertad, hemos mostrado las condiciones de olvido en que se encuentran las víctimas de la violencia. Pero también hemos establecido diálogos propositivos, se han presentado propuestas de ley, políticas de abordaje integral, reformas a normas que imposibilitan el efectivo ejercicio de derechos humanos. Hemos discutido, propuesto y generado insumos, retomando los aportes de la academia, de otros países, de nuestra misma experiencia, intentando siempre que esto sea un producto que los gobiernos retomen en beneficio de la población.

No obstante, y sin mayores diferencias en los gobiernos de la post guerra, hemos tenido pocos espacios para el diálogo, se han dejado de lado estos insumos, y se ha mostrado poco interés en abrir espacios a la participación real para que las organizaciones sociales aportemos y para que, principalmente, las víctimas de la violencia de esta guerra social puedan hacer visbles sus necesidades.

Hoy, nuevamente, queremos aportar a la construcción de un país que lleve a la paz. Este día presentamos el documento: Propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de una política pública en seguridad ciudadana en El Salvador. Este documento es el trabajo de 22 organizaciones con amplia experiencia en seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos humanos y género. Integra 22 líneas estratégicas, 82 acciones y 9 recomendaciones para atender los principales desafíos en seguridad y violencia.

Como toda propuesta desde sociedad civil, y en coherencia con un posicionamiento desde los derechos humanos, el documento parte del rechazo a los abordajes populistas y meramente punitivos. No creemos que el aumento de penas por sí mismo, la encarcelación desmedida, el discurso de guerra y la simplificación de la violencia en el paradigma del combate al enemigo sea la respuesta a la complejidad de la criminalidad y la violencia que sufre nuestro país.

Creemos en formas distintas de abordar este problema, que se basan en la garantía de los derechos fundamentales de la población, en la participación activa y la recuperación del tejido comunitario para que sea esta, la comunidad, quien oriente las acciones del Estado para su desarrollo humano integral. Creemos en el abordaje de la conflictividad entendiendo que no basta con castigar al culpable, necesitamos reparar el daño y garantizar que la violencia sufrida no vuelva a ocurrir.

Creemos que para atender la violencia y la criminalidad el Estado, pero principalmente el gobierno, debe orientar sus acciones a la prevención de la violencia, entendida esta como las acciones que el gobierno realiza para que la población pueda tener acceso a servicios fundamentales y pueda ejercer plenamente sus derechos.

Además, debe perseguir el delito, no a las personas, buscando generar las condiciones para que la Policía Nacional Civil desarrolle su labor enmarcada en la ley y en el respeto a los derechos, retirando a la Fuerza Armada a las labores de defensa que son las que le corresponden. Creemos, firmemente, que la persecución del delito debe incluir y partir de las necesidades de las víctimas, de atender su dolor y el daño que la violencia les genera.

El gobierno debe orientar sus esfuerzos a la reparación, reconociendo y asumiendo las obligaciones que tiene con ellas. No podemos olvidar a las víctimas, pero tampoco a quienes requieren transformar sus condiciones para no volver a participar de la violencia y la criminalidad. El sistema penitenciario en nuestro país es la expresión más cruel de la naturalización de la violencia, los gobiernos se han aprovechado del dolor de las víctimas para atender a este desde la venganza, intentando mostrar así su supuesta fuerza, endureciendo las penas y las condiciones de las personas privadas de libertad. Recurrir a la crueldad y la deshumanización no es ni será nunca la respuesta.

Las organizaciones reconocemos que las instituciones están debilitadas. Gobierno tras gobierno, los intereses partidarios han estado por encima de las urgencias por fortalecer a las instituciones desde la mirada de un sistema democrático.



Representantes de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana hacen entrega oficial de la propuesta de la sociedad civil para una política pública en seguridad ciudadana

La sociedad está cansada de los juegos políticos que no buscan más que mantenerse en el poder, que intentan siempre mostrarse mejor que el antecesor, pero recurriendo a viejas mañas de nepotismo, corrupción, ausencia sistemática de la rendición de cuentas y la transparencia.

Las organizaciones, pero también la sociedad en su conjunto, exigimos un cambio radical en la forma de hacer política. Este gobierno, como todos los anteriores, tiene la oportunidad de hacer las cosas distintas. Le exigimos que las haga distintas, la población ya no puede seguir siendo un juguete de intereses partidarios, el gobierno tiene el compromiso de responder de manera responsable y desde la verdad a este gran problema social. Los ecos actuales de los discursos manoduristas pueden ser populares y responder a la desesperación de una población cansada de la violencia, pero son injustos y mentirosos al querer vender soluciones inmediatistas que no atienden las causas profundas de esta violencia.

Las políticas para abordar la violencia no pueden estar ocultas a la población, requerimos transparencia, rendición de cuentas y participación activa de diversos sectores. Las mujeres, la niñez, la juventud, la población LGBTI, las comunidades excluidas históricamente exigen participación directa. La situación de violencia y criminalidad demanda una respuesta responsable que va mucho más allá de la mera presencia policial y militar, las detenciones masivas y el endurecimiento de la situación de personas privadas de libertad.



La señora Sandra Ágreda representante del Ministerio de Justicia y Seguridad brinda palabras de agradecimiento.

Este fenómeno exige políticas de largo aliento, que sume diversos sectores desde la madurez política y la búsqueda de consensos. Creemos en liderazgos que llevan al diálogo y la inclusión, necesitamos un gobierno amplio que no tenga por meta los votos sino una transformación profunda de la situación del país. Queremos propuestas distintas, y las estamos ofreciendo.

Las organizaciones presentes hemos abierto el espacio al diálogo, este será serio y crítico, basado en derechos humanos y en la igualdad y la inclusión. Estamos invitando al gobierno a tener una discusión en estas condiciones. Por ello, solicitamos a la representación del Ministro de Justicia y Seguridad Pública a que traslade las propuestas de sociedad civil, pero que sobre todo: invite al señor Ministro a que abra espacios reales de diálogo, a que se acerque a las organizaciones, a las víctimas y a los distintos sectores sociales. Lamentamos su ausencia en este evento, ya que creemos que el llamado requería de su atención y presencia. Esperamos nos tomen la palabra, y que este evento sea el inicio de un trabajo profundo que nos integre a todas y todos. Quedamos a la espera de su convocatoria.

Muchas gracias